MÓNICA PERALTA RAMOS

LA ECONOMÍA POLÍTICA ARGENTINA: PODER Y CLASES SOCIALES (1930-2006)

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

México - Argentina - Brasil - Chile - Colombia - España
Estados Unidos de América - Guatemala - Perú - Venezuela

Primera edición, 2007

Peralta Ramos, Mónica
La economía política argentina : poder y clases sociales 1930-2006 - 1a ed. -
Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 2007.
453 p. ; 23x16 cm. (Economía)

ISBN 978-950-557-717-0

1. Economía Política Argentina. I. Título
CDD 320.098 2

Ilustración y armado de tapa: Juan Balaguer

D. R. © 2007, Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A.
El Salvador 5665; 1414 Buenos Aires
fondo@fce.com.ar / www.fce.com.ar
Av. Picacho Ajusco 227; 14200 México D.F.

ISBN: 978-950-557-717-0

Fotocopiar libros está penado por la ley.

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión o digital, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma, sin la autorización expresa de la editorial.

Impreso en la Argentina - *Printed in Argentina*
Hecho el depósito que marca la ley 11.723.

ÍNDICE

Introducción 13
La sociedad argentina: elementos conceptuales para su análisis 13
La economía mundial occidental: el liderazgo hegemónico en el centro 26
Cambios en el ritmo de la acumulación del capital en los países centrales 35
Nuevas formas de integración productiva y financiera a nivel mundial: sus consecuencias 43
Impacto de los cambios en la coyuntura internacional sobre la acumulación del capital y el conflicto social en la Argentina 51
La acumulación del capital y la dinámica del conflicto social en la Argentina 53

I. Orígenes del desarrollo industrial argentino 71
Las etapas del desarrollo industrial 71
Cambios en las relaciones de fuerzas entre clases y fracciones de clase 84
El peronismo y la conciliación entre los intereses de la burguesía nacional y los de la clase obrera 95

II. Paradojas del desarrollo industrial argentino 109
Los principales conflictos sociales 109
El problema de la legitimidad institucional 119
Distintas respuestas a la crisis: los "tiempos" de la Revolución Argentina 126

III. Explosión de la crisis de legitimidad: del cuestionamiento de las clases subalternas al terrorismo de Estado 137
El nuevo peronismo 137
La política económica del "Proceso de Reorganización Nacional": nuevas reglas de juego para el conflicto social 161
La desestabilización del Proceso 180

I. ORÍGENES DEL DESARROLLO INDUSTRIAL ARGENTINO

Las etapas del desarrollo industrial

Hasta 1930, el desarrollo de la industria argentina acompañó, y aun apoyó, la expansión general de la economía pero no llegó a dirigirla. Es decir, no logró desempeñar un papel dinámico. Este crecimiento industrial estuvo basado en el desarrollo de las exportaciones agrícola ganaderas y en la expansión del mercado interno a partir de la importación de capital y trabajo.

El predominio de las ramas de alimentos, vestido, madera y curtiembre en el total del valor agregado por la industria a lo largo de las tres primeras décadas del siglo xx, indica claramente la sencilla estructura que por ese entonces tenía el sector manufacturero. En efecto, hasta principios de la década de 1930 la producción de bienes de consumo no durable constituía más de la mitad de la producción industrial. Además, las importaciones de bienes de consumo representaban el 13% del consumo total y las importaciones de máquinas y equipos llegaban al 35% de la inversión total en este rubro. Por último, en esas tres primeras décadas, las importaciones de bienes de consumo no durable constituyeron la mayor proporción del total de las importaciones del país.

La crisis internacional de 1930 marcó el comienzo de un nuevo período en el desarrollo económico argentino, caracterizado por el rol dinámico que habría de jugar la industria. La caída brusca de los precios agrícolas, producto del deterioro de los términos del intercambio, afectó negativamente al sector agropecuario. La implantación del control de cambios y la depreciación de la moneda protegieron a la industria local y causaron un traslado de ingresos del sector agrícola al industrial. Estos fenómenos, sumados a una serie de hechos políticos que serán tratados más adelante, dieron lugar a una nueva actitud de la elite gobernante frente al proceso de industrialización.

Evolución de la acumulación del capital

Una de las características distintivas de la industrialización argentina fue la sustitución de importaciones. Se ha estimado que el 90% del crecimiento de la manufactura entre comienzos de la década de 1930 y principios de la de 1960 se explicó por la reducción del coeficiente de importación en la oferta total de productos manufacturados. En los años 1925-1929, la importación de mercaderías representaba cerca del 25% del Producto Bruto Interno (PBI); hacia 1957-1961 la proporción había disminuido al 8% del mismo.[1]

Esta industrialización pasó por dos etapas claramente diferenciadas. El análisis de la evolución de la estructura manufacturera entre 1930 y 1960 revela que entre 1925-1929 y 1948-1950 las ramas textiles y de alimentos y bebidas representaban el 45% de la expansión de la producción industrial neta, en tanto que la metalúrgica respondía por el 22% de dicha expansión. En el período subsiguiente, esta relación se invirtió. Entre 1948-1950 y 1959-1961, la expansión del sector metalúrgico representó el 57% del total del crecimiento industrial mientras que las ramas textil y alimenticia sólo el 9%. Coherentemente con este desarrollo diferencial, hasta principios de la década de 1950 las ramas textil y alimenticia realizaron el mayor esfuerzo sustitutivo de importaciones, mientras que a partir de dicha fecha el mayor esfuerzo se concentró en el sector metalúrgico.[2]

Conviene preguntarse por el significado de estas etapas de industrialización desde la perspectiva de la acumulación del capital, es decir, en términos de la reproducción global del sistema capitalista. Si consideramos a los incrementos en el *stock* de capital como un indicador –parcial, pues sólo tiene en cuenta la porción del capital fijo– de los aumentos del capital constante, y a los aumentos en la ocupación obrera en la industria como un indicador del incremento del capital variable, advertimos que, entre 1935-1945 y entre 1945-1955, la composición orgánica del capital se caracterizó por permanecer relativamente estable (véase el cuadro 1.1). Esto significa que en dichos subperíodos la industrialización se apoyó en la incorporación creciente de mano de obra al proceso productivo y que la extracción de plusvalía absoluta fue la forma socialmente predominante de explotación del trabajo asalariado por el capital. En cambio, en el subperíodo comprendido entre 1956 y 1961, sucedió exactamente el fenómeno contrario: la industrialización se basó en un considerable aumento de la composición orgánica del capital. Los aumentos del capital constante superaron a los del capital variable y el crecimiento de la productividad del trabajo se constituyó en el principal factor explicativo del impulso industrializador, ello indicaría que a nivel social la extracción de plusvalía relativa era la forma principal de explotación del trabajo asalariado por el capital.

[1] Carlos Alejandro Díaz, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic*, New Haven, Yale University Press, 1970.

[2] *Ibid.*

CUADRO 1.1. *Tasas de crecimiento anual acumulativo del* stock *de capital y de la mano de obra ocupada en la industria, 1935-1961 (en porcentajes).*

	1935-1945	*1946-1955*	*1956-1961*
Incremento del *stock* de capital	3,7	1,8	9,8
Incremento de la mano de obra ocupada	3,4	2,9	0,4

Fuente: *Stock* de capital: basado en los índices de *stock* de capital (1960=100) de Víctor Elías, "Estimates of value added, capital and labor in Argentine manufacture, 1935-1963", tesis de doctorado, Illinois, Universidad de Chicago, junio de 1969. Empleo obrero: para el período 1935-1945, basado en los índices de ocupación obrera (base 1929=100) presentados en Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, "El movimiento obrero en los orígenes del peronismo", en *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972. Para el período 1946-1961, basado en estimaciones de población obrera ocupada en la industria del CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo), datos provistos por dicha institución.

Si se compara el proceso productivo de las ramas textil o alimenticia con el metalúrgico, se advierte que en términos generales el segundo es más capital intensivo que los primeros. No es sorprendente, por lo tanto, que el sector metalúrgico haya sido el que ejerció el rol más dinámico en la segunda etapa de industrialización. Además, si se compara la evolución del incremento del *stock* del capital entre las distintas ramas industriales, se advierte que, al mismo tiempo que los sectores textil y alimenticio lideraban el desarrollo industrial y concentraban el mayor esfuerzo sustitutivo de importaciones, éstas registraban una caída en la tasa de incremento acumulativo del *stock* del capital (véase el cuadro 1.2). Se puede entonces concluir que el desarrollo de estos sectores se basó en la utilización extensiva de mano de obra.

CUADRO 1.2. *Tasas de crecimiento anual acumulativo del* stock *de capital por tipo de industria, 1935-1961 (en porcentajes).*

	1935-1945	*1946-1955*	*1956-1961*
Alimentos y bebidas	2,1	-1,2	9,1
Tabaco	2,8	1,1	4,3
Textiles	12	1,8	6,9
Madera	6,2	-6,1	5,7
Papel	5	6,1	11,7
Imprenta y publicaciones	-1,6	-1,2	7,9
Productos químicos	9	5,2	7,1
Petróleo y derivados	-3,9	4,7	17,3
Caucho	9,9	8,8	10,3
Cuero	4,5	-1,8	7,1
Piedra, vidrio y cemento	6,5	-1,2	3,1
Metales	7	9	10,9
Vehículos y maquinarias	-0,3	2,3	12,5
Maquinaria eléctrica y aparatos	12,8	8,5	16
Varios	1,5	-4,1	4,8
Total industrias manufactureras	3,7	1,8	9,8

Fuente: Cálculos basados en índices de *stock* de capital, en Víctor Elías, "Estimates of value added, capital and labor in Argentine manufacture, 1935-1963", *op. cit.*

Desde mediados de la década de 1950, todas las ramas industriales registraron crecimientos considerables del *stock* del capital. Esto, sumado a la drástica disminución de mano de obra ocupada, señala los importantes crecimientos de la composición orgánica en todas las ramas industriales. Este fenómeno se dio en forma más acentuada en las ramas productoras de bienes de consumo durable, intermedios y de capital. Paralelamente, se verificó un drástico cambio en la evolución de las diferentes ramas industriales. El dinamismo de la producción se centró en el desarrollo de las ramas productoras de bienes intermedios, de consumo durable y de capital. Las ramas productoras de bienes de consumo no durable, y en particular las ramas textil y de alimentos, registraron un estancamiento de la producción. A diferencia de lo ocurrido anteriormente, su evolución pasó a ser de tipo vegetativo

Coherentemente con el crecimiento de la composición orgánica del capital, se produjo una restricción de la capacidad de absorción de mano

de obra por parte de la industria. Si bien éste fue un rasgo común a todas las ramas industriales, afectó en particular a los sectores productores de bienes de consumo y más especialmente a las ramas textil y alimenticia. En todos estos casos, se registró una considerable expulsión de mano de obra ocupada (véase el cuadro 1.3).

CUADRO 1.3. *Tasas de crecimiento anual acumulativo del empleo obrero en la industria manufacturera, 1946-1961 (en porcentajes).*

	1946-1950	*1950-1955*	*1950-1961*
Industrias dinámicas *	8,8	4,5	2,8
Sector metalúrgico	10,9	5,8	3,8
Industrias vegetativas *	2,1	-0,7	-2,2
Alimentos y bebidas	4,4	0,9	-1,2
Total industria manufacturera	4,8	1,5	0,4

* Industrias dinámicas son las que lideran el desarrollo industrial en la última etapa de industrialización (es decir: metales, maquinaria eléctrica y aparatos, vehículos y maquinaria, etc.), industrias vegetativas son las que lideran el desarrollo industrial en las dos primeras etapas de industrialización (alimentos y bebidas, textil, tabaco, etcétera).

Fuente: Cálculos basados en estimaciones de población obrera ocupada en la industria del CONADE, inéditas y provistas por esta institución.

De lo dicho se desprende que la industrialización argentina no sólo pasó por dos grandes etapas, netamente diferenciadas a partir del liderazgo que en cada una de ellas ejerció un sector particular de la industria. Este cambio de etapas indica además el pasaje de un proceso de industrialización centrado en la incorporación creciente de mano de obra al proceso productivo a otro basado en el progresivo reemplazo de mano de obra por bienes de capital. Esto significa que se produjo una modificación drástica en la forma de explotación del trabajo asalariado que predominaba a nivel social. Se pasó así de una etapa en la que la extracción de plusvalía absoluta era el principal mecanismo destinado a impulsar la acumulación del capital a otra en donde ese rol fue ejercido por la extracción de plusvalía relativa. El cambio en la composición orgánica del capital que se registró desde mediados de la década de 1950 estaría indicando la alteración del sistema de organización social del trabajo característica al modelo clásico de desarrollo capitalista: el pasaje de la manufactura a la gran industria.

Conviene ahora preguntarnos por las causas que explicarían estos cambios. Para ello, trataremos de enfocar este problema desde dos aspectos complementarios. Por un lado, buscaremos los condicionantes internos, es decir, las causas que se derivan de las condiciones en que se desarrolla localmente la acumulación del capital. Por el otro, intentaremos detectar la incidencia del contexto internacional en la evolución de estos fenómenos. En este sentido, analizaremos sintéticamente la forma que por ese entonces asumía la dependencia económica del país en relación con los centros capitalistas más desarrollados.

Evolución de la tasa de ganancia del capital industrial

Si se considera la remuneración del capital (la suma de utilidades, interés, alquiler y renta) como un indicador de la masa de ganancia, se advierte que ésta aumentó levemente hasta 1944. A partir de entonces y hasta 1954, disminuyó bruscamente, pasando de representar el 55,2% del Ingreso Neto en 1944 al 42,3% del mismo en 1954. Desde ese momento, se recuperó progresivamente y en 1962 llegó a significar casi la misma proporción del Ingreso Neto que en 1944. Como contrapartida, entre 1946 y 1955 la remuneración del trabajo (la suma de sueldos, salarios y aportes jubilatorios) aumentó en forma considerable su participación en el ingreso. A partir de allí, disminuyó progresivamente.

Teniendo en cuenta el cociente entre la remuneración del capital y la del trabajo como un indicador de la tasa de plusvalía (p'= masa de ganancia/capital variable), se advierte que ésta aumentó progresivamente hasta 1944; a partir de entonces disminuyó considerablemente y, a pesar de una serie de fluctuaciones, permaneció más o menos constante a un nivel bajo hasta 1954. Luego creció progresivamente recuperando en la década de 1960 los niveles alcanzados en los años de 1940.

Ahora bien, ¿cuál es el significado de estos procesos desde la perspectiva de la evolución de la tasa de ganancia del capital industrial?

Si analizamos la evolución de la tasa de plusvalía (p'), del capital constante (cc) y del capital variable (cv) (véase el cuadro 1.5), podemos concluir que en el período comprendido entre 1935 y 1944: el capital constante aumentó el 35%, el capital variable creció el 37% y la tasa de plusvalía aumentó el 8,8%. Se deduce entonces que la de ganancia aumentó en todo este período en mayor proporción que la tasa de plusvalía porque la proporción del capital

variable sobre el capital total varió en el mismo sentido que la tasa de plusvalía.[3] Esto se dio conjuntamente con un incremento de la masa de ganancia.

CUADRO 1.4. *Evolución de la participación de la remuneración del trabajo y del capital en el total del ingreso neto (a costo de factores), y de la tasa de plusvalía en la industria manufacturera, 1935-1963 (en porcentajes).*

	Remuneración del trabajo a	*Remuneración del capital b*	*Tasa de plusvalía c*
1935	46,8	53,2	113,5
1938	46,6	53,4	114,5
1941	45,3	54,7	121
1944	44,8	55,2	123,5
1947	46,6	53,4	114,5
1950	56,7	43,3	76,5
1951	54,5	45,5	83,5
1952	57,5	42,5	74
1953	56,4	43,6	77,5
1954	57,7	42,3	73,5
1955	52	48	92,5
1956	52,5	47,5	90
1957	53,5	46,5	87
1958	49,8	50,2	101
1959	45,5	54,4	119,5
1960	47,5	52,5	111
1961	45,1	54,9	122
1962	44,5	55,5 d	124,5
1963	45,1	54,9 d	122

a. Comprende la suma de los sueldos, salarios y aportes jubilatorios.

b. Comprende la remuneración de la propiedad de la empresa y del capital, es decir, la suma de utilidades, interés, alquiler y renta. No comprende la depreciación del capital.

c. Es el cociente entre la remuneración del capital y la del trabajo. Es decir, b/c.

d. Calculado a partir de la estimación de la depreciación, pues este dato faltaba para esos dos años.

Fuente: 1935-1945, Guido di Tella y Manuel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 1967, p. 119. Para el período posterior a 1950, CONADE/CEPAL, *Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina*, vol. 2, Buenos Aires, 1965, p. 48.

[3] Karl Marx, *El Capital*, t. III, vol. 6, México, Siglo XXI, 1976.

En el período comprendido entre 1946 y 1954, el capital constante aumentó el 16%, el capital variable se incrementó también en el 39%, pero la plusvalía disminuyó en el 59%. De lo cual se deduce que la tasa de ganancia disminuyó aunque en menor proporción que la de plusvalía porque la proporción del capital variable sobre el capital total varió en el sentido opuesto a la tasa de plusvalía aunque en menor proporción. En el período 1955-1963, el capital fijo dentro del capital constante (o sea CC1) aumentó el 124% mientras que la porción del capital circulante dentro del capital constante aumentó el 25,5%. El capital variable disminuyó el 4,2% y la tasa de plusvalía creció el 32%. Por lo tanto, es posible concluir que, a pesar del aumento de la tasa de plusvalía, la tasa de ganancia disminuyó porque la proporción del capital variable dentro del capital total varió en el sentido opuesto a la tasa de plusvalía y en mayor proporción. Por otra parte, esta disminución de la tasa de ganancia del capital industrial coincidió con un aumento de la masa de ganancia.

Durante el primer subperíodo analizado, tanto la tasa de ganancia como la tasa de plusvalía aumentaron. En el segundo subperíodo ambas variables disminuyeron y, en el último, el aumento de la tasa de plusvalía no logró impedir la caída de la tasa de ganancia, debido muy probablemente al incremento de la composición orgánica del capital registrado a lo largo de este período. Ahora bien, esto no quiere decir que en el corto plazo la tasa de ganancia no haya podido aumentar. Para ello, hubiera sido necesario que la composición orgánica del capital se incrementase en menor proporción de lo que creció la tasa de plusvalía. Sin embargo, en el caso concreto que hemos analizado, la evolución de corto plazo de la tasa de ganancia se asemeja a la tendencia de largo plazo. Se verifica pues una tendencia a la disminución de la tasa de ganancia debido al aumento de la composición orgánica del capital.

Por último, y antes de extraer conclusiones generales, veamos qué pasa durante el período de gobierno peronista, es decir, entre 1946 y 1955 (véase el cuadro 1.6). El mismo puede ser subdividido en dos subperíodos. Entre 1946 y 1950, el capital constante creció el 20,8% y el capital variable el 35%, mientras que la tasa de plusvalía bajó el 34,6%. De lo que se desprende que la tasa de ganancia disminuyó en menor proporción que la tasa de plusvalía porque la proporción del capital variable en el capital total varió en sentido opuesto a la tasa de plusvalía, aunque en menor proporción. Esto sucedió conjuntamente con una disminución de la masa de ganancia. En cambio, entre 1950 y 1954, el capital constante, el capital variable y la tasa de plusvalía disminuyeron el 3,8%, el 1,7% y el 4% respectivamente. De esto se

deduce una conclusión similar a la del subperíodo previo: la tasa de ganancia disminuyó en menor proporción que la tasa de plusvalía porque la proporción del capital variable sobre el capital total varió en el sentido opuesto a la tasa de plusvalía. También en este caso disminuyó la masa de ganancia, aunque en menor proporción. Si bien en ambos subperíodos se produjo una caída de la tasa de ganancia, como en el primero la disminución de la tasa de plusvalía fue mayor que en la del segundo, se puede concluir que la caída de la tasa de ganancia fue mayor en el primer subperíodo que en el segundo.

CUADRO 1.5. *Tasas de incremento anual acumulativo del capital constante (CC), del capital variable (CV) y de la tasa de plusvalía (P') 1935-1963 (en porcentajes).*

	1935-1944	*1946-1954 a*	*1955-1963*
CC1 b	3,2	1,9	10,6
CC2 c			2,8
CV d	3,4	4,1	-0,4
P'	0,9	-5,9	3,0

Fuente: Con la excepción de los ítems que se detallan más abajo, se han usado las mismas que en el cuadro 1.4.

a. Para calcular P' en 1946, se utilizo I] la evolución de la participación del trabajo en el ingreso sectorial a costo de factores que se encuentra en CEPAL, *El desarrollo económico y la distribución del Ingreso en la Argentina*, Buenos Aires, 1968; II] a partir de la variación entre la participación del trabajo y de la tasa de plusvalía (P') en todo el período 1935-1963, hemos estimado la tasa de plusvalía en 1946.

b. Es la porción de capital fijo dentro del capital constante. Se utilizaron los índices de *stock* de capital en Víctor Elías, "Estimates of value added, capital and labor in Argentine manufacture, 1935-1963", *op. cit.*, pp. 76-79.

c. Es la porción de materias primas o capital circulante en el total del capital constante. CONADE/CEPAL, *Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina*, *op. cit.*

d. Es el capital variable: I] Para el período 1935-1944 se usó como indicador del mismo a la evolución de la ocupación obrera en la industria. Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, "El movimiento obrero en los orígenes del peronismo", *op. cit.* II] En el período 1946-1954, se estimó el CV gastado (precios de 1960) a partir de la proporción con la que participa en cada año en el total del Producto Bruto, de acuerdo con Carlos Alejandro Díaz, *Etapas de la industrialización argentina*, Buenos Aires, Instituto Torcuato di Tella, Centro de Investigaciones Económicas, septiembre de 1965; III] en el período 1955-1963, se utilizaron los datos del CONADE/CEPAL, *Distribución del ingreso y cuentas nacionales en la Argentina*, *op. cit.*, deflacionados por los índices de costo de vida, que se encuentran en Eprime Eshag y Rosemary Thorp, "Las políticas económicas ortodoxas de Perón a Guido", en Aldo Ferrer, *Los planes de estabilización en la Argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1969.

Sintetizando entonces: el pasaje de una etapa de industrialización a otra fue la consecuencia de la necesidad de elevar la tasa de ganancia del capital industrial a un nivel adecuado a las exigencias de la acumulación del capital. La política de redistribución de ingresos del gobierno peronista trajo aparejada una importante disminución de la tasa de plusvalía, de la masa de ganancia y de la tasa de ganancia. Para elevar esta última e incrementar la tasa de plusvalía fue necesario reemplazar mano de obra por capital, ello significa aumentar la composición orgánica del capital. Más adelante se verá que en un primer momento la redistribución de ingresos impulsada por el gobierno peronista fue un importante estimulo a la acumulación del capital, ya que permitió ampliar considerablemente el mercado interno. Sin embargo, en un segundo momento repercutió negativamente sobre la tasa de ganancia limitando así la posibilidad de permanencia en el poder de la alianza de clases que constituyera al peronismo. La necesidad de incrementar la composición orgánica del capital marcó además el inicio de una nueva etapa de industrialización. En la misma, las ramas más capital intensivas y con una organización social del trabajo más compleja pasaron a liderar el desarrollo económico.

CUADRO 1.6. *Tasas de crecimiento anual acumulativo del capital constante (CC) del capital variable (CV) y de la tasa de plusvalía (P'), 1946-1954 (en porcentajes).*

	1946-1950	*1950-1954*
CC	4,8	-0,9
CV	7,9	-0,4
P'	-10,2	-0,9

Nota: El capital constante representa sólo el capital fijo.
Fuente: Las mismas que se utilizaron para la confección del cuadro 1.5.

La acumulación del capital y la inversión directa extranjera

El cambio de etapas en la industrialización argentina fue también condicionado por ciertos factores externos. En lo que sigue, mencionaremos de manera muy sintética algunas características de la evolución de las inversiones extranjeras a lo largo del período, las cuales tienen una importancia crucial para explicar las alternativas del desarrollo industrial.

Si se compara el fenómeno colonial con el imperialista, se advierte que más allá de sus semejanzas en términos de relación asimétrica de poder, entre ambos casos median todas las diferencias que existen entre una etapa primitiva del desarrollo capitalista y la etapa más avanzada de la producción en gran escala y de integración de las finanzas a la industria. La característica principal del mercantilismo fue el comercio reglamentado entre la colonia y la metrópoli de forma tal que sus términos eran siempre favorables a la segunda y desfavorables para la primera. Si bien se realizaban inversiones en las colonias, su papel era netamente secundario en relación con la explotación comercial. Durante la fase de expansión imperialista, la explotación comercial no desapareció pero estuvo subordinada a la exportación de capital. La exportación de valor destinada a crear plusvalía en otras regiones del mundo no necesariamente incorporadas al modo de producción capitalista constituyó el rasgo esencial del fenómeno imperialista.

Los cambios en la composición y en la orientación de los capitales exportados permiten distinguir distintas fases de expansión del imperialismo. En la primera, la exportación de capital dinero se orientó fundamentalmente hacia la extracción de materias primas. En la segunda fase, lo fundamental fue la exportación de tecnología orientada hacia la explotación del sector manufacturero. Estas dos formas de exportación de capitales coexistieron, pero la segunda tendió a subordinar a la primera en la medida en que maduró el desarrollo capitalista en los países centrales. Así como la expansión imperialista coexistió con la explotación comercial aunque subordinándola, la exportación de tecnología coexistió con la exportación de capitales destinados a la extracción de materias primas. Tales procesos constituyeron diferentes formas de búsqueda de solución externa a las contradicciones inherentes al desarrollo capitalista en los países centrales. La preeminencia de uno u otro modo de exportación de capital dependió del nivel de desarrollo alcanzado por la acumulación en los países centrales. Cada una de estas formas de expansión externa coincidió, además, con un determinado grado de concentración y centralización de capitales. Estos cambios de fase durante la expansión imperialista se dieron conjuntamente con una alteración del balance de poder entre los países más desarrollados, que cristalizó en el reemplazo de la hegemonía inglesa por la estadounidense después de concluida la Segunda Guerra Mundial.

Conviene ahora preguntarse por la relación entre estos procesos y las alternativas de la industrialización argentina. Nuestra hipótesis es que el cambio de etapas de industrialización fue en parte condicionado por el desarrollo

de la fase de expansión imperialista centrada en la exportación de tecnología. Si se analiza la orientación, el volumen y el origen de las inversiones extranjeras desde principios del siglo XX hasta 1930, se advierte una importante disminución en su volumen, una orientación cada vez mayor hacia el sector industrial y una relativa disminución de la importancia de las inversiones inglesas. En realidad, se pueden detectar dos subperíodos: hasta 1914 el monto de las inversiones extranjeras creció pronunciadamente llegando a representar en 1910 el 25% del Producto Bruto Nacional. Por ese entonces, el 65,4% del total de las inversiones extranjeras de largo plazo eran inglesas. Éstas se orientaron básicamente hacia la construcción de ferrocarriles y la compra de valores públicos. A partir de la Primera Guerra Mundial, las inversiones extranjeras disminuyeron drásticamente. En 1913, representaban el 22% del Producto Bruto Nacional, al año siguiente esta proporción era del 10%. Desde entonces, no cesaron de disminuir. Esa tendencia coincidió con un cambio en el país de origen de los capitales invertidos y en la orientación de los mismos.[4] Hacia 1913 las inversiones inglesas representaban el 59,3% del total de las inversiones extranjeras, hacia 1927 habían descendido al 24% de dicho total. Paralelamente a esta evolución, aumentaron las inversiones provenientes de otros países. Entre ellas se destacaron las inversiones estadounidenses, que hacia 1931 representaban el 20% del total de las inversiones extranjeras.

Otra característica importante a señalar es el cambio en la orientación de las inversiones extranjeras. Se produjo una diversificación: disminuyeron las inversiones en valores públicos y ferrocarriles, y aumentaron las que se orientaron al comercio de exportación e importación, a los bancos y a la industria. En este último caso, los rubros prioritarios fueron los frigoríficos y la industria alimenticia. La crisis económica internacional de 1929 habría de acentuar estos cambios en la composición, orientación y origen de los capitales extranjeros.

Desde la Primera Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1950, el monto de inversiones extranjeras fue cuantitativamente poco importante. Sin embargo, desde un punto de vista cualitativo, la relevancia de las mismas fue muy grande. En efecto, el cambio de tendencia en la orientación de las inversiones extranjeras se dio en circunstancias en que la industrialización lideraba el desarrollo económico. Más adelante veremos las consecuencias de estos procesos sobre la conformación de la burguesía industrial. Durante el

[4] Guido di Tella y Manuel Zymelman, *Las etapas del desarrollo económico argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 1967; Oscar Altimir y Juan Sourrouille, "Los instrumentos de promoción industrial en la posguerra", en *Desarrollo Económico*, vol. 27, Buenos Aires, 1967, pp. 372 y 373.

gobierno peronista –es decir, entre 1945 y 1955–, los nuevos aportes de capital extranjero fueron mínimos. Esto se debió en buena parte a la política nacionalista implementada por dicho gobierno. Esta política impuso una serie de restricciones a la inversión extranjera, entre ellas, la prohibición de repatriar utilidades. Además, la nacionalización de empresas extranjeras generó un clima nada propicio para las nuevas inversiones de capital extranjero. Pero, en los últimos años de ese gobierno se verificó un cambio de actitud hacia el capital extranjero que culminó en la ley 14.222 de 1953. La misma estableció por primera vez un estatus legal definido para este tipo de inversiones. Permitió transferir las utilidades líquidas obtenidas hasta el 8% sobre el capital registrado. El Estado continuó controlando la selección de inversiones y persistieron las trabas a la inversión extranjera. Después del derrocamiento del gobierno peronista, ésta comenzó a fluir hacia la Argentina en cantidades significativas. Las nuevas inversiones consolidaron las pautas anteriormente señaladas. En efecto, del total de inversiones extranjeras autorizadas entre 1955 y 1963, aproximadamente el 90% tuvo como destino las ramas más dinámicas de la industria, dispersándose el 10% restante entre la agricultura, la infraestructura y las industrias vegetativas. Se estima que entre el 50% y el 55% del total de las inversiones realizadas se orientó hacia la producción de bienes de capital.[5] Más aún, los capitales estadounidenses representaron el 56% del total invertido en todo este período. Los de origen inglés y suizo, el 8% del total respectivamente y los alemanes, italianos y holandeses cerca del 6% en cada caso. Hacia 1963, las inversiones estadounidenses en la industria manufacturera representaban el 61% del total de las inversiones de los Estados Unidos en la Argentina.[6]

Esta orientación del capital extranjero hacia las ramas más capital intensiva de la industria tuvo una incidencia significativa sobre las pautas que asumió la acumulación del capital en el período. La necesidad de restituir la tasa de ganancia del capital industrial a un nivel adecuado para estimular la acumulación se dio en circunstancias en que se consolidaba la fase de expansión imperialista centrada en la exportación de capital hacia las ramas más capital intensivas. Ambos fenómenos cristalizaron en una elevación de la composición orgánica del capital y en una creciente dependencia tecnológica.

[5] Oscar Altimir y Juan Sourrouille, "Los instrumentos de promoción industrial...", *op. cit.*, y David Felix, *Industrialización sustitutiva de importaciones y exportación industrial en la Argentina*, Buenos Aires, Instituto Torcuato di Tella, Centro de Investigaciones Económicas, 1968.

[6] Business International, *Argentina today, Conditions and Prospects for Profit*, Nueva York, Business International, 1966.

Cambios en las relaciones de fuerzas entre clases y fracciones de clase

Fraccionamiento de la burguesía agropecuaria

La crisis internacional de 1930 señala el inicio de un período en el cual la industria se constituyó en el elemento dinámico de la expansión económica argentina. Esta crisis generó las condiciones estructurales para la formación de una alianza de clases favorable a la industrialización.[7] En los países exportadores de materias prima como la Argentina, "el crecimiento industrial limitado no perjudica necesariamente a los grupos agropecuarios en su totalidad, en especial cuando el esquema clásico de la división del trabajo deja de funcionar adecuadamente".[8] El proteccionismo de los países centrales limitó seriamente la posibilidad de expansión económica a partir de una mayor participación en el mercado externo. En estas circunstancias, el mercado interno adquirió una importancia creciente y la limitación de las importaciones al nivel alcanzado por las exportaciones se constituyó en la alternativa más racional para la burguesía agropecuaria en el poder. Lejos de perjudicar sus intereses económicos, la industrialización limitada –es decir, suficiente para sustituir las importaciones de productos manufactureros pero insuficiente para alterar la estructura económica del país centrada en las exportaciones agropecuarias–, fue la respuesta más adecuada a la nueva coyuntura económica internacional.

En aquel momento, la burguesía agropecuaria se dividía básicamente en dos fracciones. La más poderosa estaba constituida por los invernadores, o sea, por el grupo ligado directamente al comercio externo y al capital extranjero. Los criadores de hacienda constituían la fracción menos favorecida y dependían económicamente de los invernadores, los que derivaban su posición de privilegio de la posesión de buenos pastos tanto en invierno como en verano,[9] hecho que les permitía asegurar a los frigoríficos una oferta constante de carne a lo largo del año. Para los criadores, los invernadores eran la mediación inevitable para llegar a los frigoríficos. A ellos vendían sus animales que, luego de ser engordados, eran revendidos a los frigoríficos. La evolución tecnológica en el procesamiento de la carne fue una

[7] Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.

[8] *Ibid.*, p. 55.

[9] Horacio Giberti, *Historia económica de la ganadería argentina*, Buenos Aires, Hachette, 1961, y *El desarrollo agrario argentino*, Buenos Aires, Eudeba, 1964.

de las causas de este fraccionamiento dentro de la burguesía agropecuaria. La carne enfriada, superior a la congelada, apareció desde finales de la primera década del siglo XX. Su importancia se acrecentó en los años veinte cuando pasó a ocupar el primer puesto en la exportación de carnes. La carne enfriada debía de ser consumida dentro de los 45 días de faenado el animal, por lo que necesitaba una oferta constante y no estacional, como en el caso de la carne congelada. A diferencia de los criadores, los invernadores poseían las tierras de mejor calidad. Esto les permitió aprovechar los cambios ocurridos en el procesamiento de la carne y en la demanda exterior, y lograr de ese modo el monopolio del comercio con Inglaterra.

La firma del tratado Roca-Runciman en 1933 y su posterior revisión en 1936 pusieron en evidencia la hegemonía de los invernadores sobre los criadores y también sobre la burguesía industrial. El tratado fue precedido por la Conferencia Imperial de Ottawa, donde se estipularon una serie de restricciones en las cuotas de importación de Inglaterra sobre productos cuyo origen no fuese el Commonwealth. Esto dañaba seriamente los intereses de los estancieros ligados al comercio con Inglaterra, es decir, los invernadores. Ante el temor de perder su principal mercado, los invernadores lograron que la elite en el gobierno firmara el tratado conocido como Roca-Runciman, en el que se aseguraba a los invernadores una cuota de exportación de carne enfriada más baja, pero estable. El precio de esta transacción consistió en enormes concesiones a Inglaterra, entre ellas el compromiso de la Argentina a tratar con benevolencia a las inversiones inglesas, a no gravar con impuestos el carbón y otras importaciones de origen inglés y a no incrementar los impuestos aduaneros existentes. El 85% de las exportaciones de carnes argentinas a Inglaterra quedaron en manos de frigoríficos ingleses, y sólo el 15% podía ser comercializado por frigoríficos argentinos, siempre y cuando estos no fuesen privados. Además, Inglaterra se aseguró el monopolio del transporte de carne. Este contrato fue revisado en 1936 pero las concesiones a Inglaterra no fueron drásticamente modificadas. Los términos del contrato eran sorprendentes pues ya en 1936 –debido a la expansión de las exportaciones y al mejoramiento de la situación internacional– la Argentina estaba en una posición más favorable para la negociación.

Es posible concluir que la elite conservadora en el gobierno negoció con Inglaterra teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de las reivindicaciones de la fracción más poderosa de la burguesía agropecuaria, que tenía suficiente control del poder político como para garantizarse, a través

de una serie de concesiones, una posición de privilegio económico. Sin embargo, una vez asegurada su cuota en el comercio de exportación, esta fracción apoyó un plan económico destinado a desarrollar ciertas industrias en el país. Éste fue apoyado por la Unión Industrial Argentina (UIA), organización empresaria que nucleaba a la burguesía industrial. A pesar de que la UIA se opuso a la firma del tratado Roca-Runciman, no puede decirse que esta oposición se haya hecho en defensa de la expansión industrial. Pretendió, en cambio, asegurar la supervivencia de la industria amenazada seriamente por las concesiones hechas a los productos manufactureros ingleses.

El modelo de desarrollo industrial limitado propuesto por la elite conservadora en el gobierno no encontró una seria oposición. Ni las organizaciones empresarias ni ningún otro partido político asumió la defensa de otro proyecto de industrialización. La principal oposición al proyecto oficial provino de los sectores más débiles de la burguesía agropecuaria.

Conformación de la burguesía industrial

Algunos autores sostienen que por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial no existía un importante fraccionamiento dentro de este sector. Más aún, se ha sostenido que en el caso de haber existido, los pequeños y medianos empresarios industriales concentraban poco poder y no podían discutir la hegemonía de los grandes capitales vinculados al capital extranjero y representados corporativamente a través de la UIA. Sin embargo, la importancia del grado de concentración industrial y de la penetración de capital extranjero en la industria hacia mediados de la década de 1930 permite sostener la hipótesis de la existencia de un considerable fraccionamiento de la burguesía industrial. Existió, además, una estrecha relación entre este fraccionamiento y la inversión de capital extranjero en la industria. Este vínculo explica el surgimiento de un nuevo actor social predispuesto a orientarse hacia un desarrollo de tipo nacionalista, ni bien este modelo fue formulado políticamente a comienzos de la década de 1940.

Según los datos del censo de 1935, más del 50% del total de la industria era en ese entonces propiedad de extranjeros.[10] Hacia 1937, cada fábrica

[10] Adolfo Dorfman, *Evolución industrial argentina*, Buenos Aires, Losada, 1942.

grande ocupaba tantos obreros como 55 de las pequeñas y producía por 145 de ellas. Además, cada obrero empleado en una fábrica grande producía casi tres veces más que uno de una pequeña. El número de empresas artesanales y semiartesanales era muy significativo. Los establecimientos que tenían hasta diez obreros y los que no ocupaban personal asalariado constituían casi el 85% del total de establecimientos. Por otra parte, lo que podríamos llamar empresas pequeñas, en tanto empleaban menos de 50 obreros, constituían el 11,6% del total. Podría decirse entonces que el 96% de los establecimientos de la época eran artesanales, semifabriles y pequeñas fábricas, reuniendo entre todos el 39% del total de obreros ocupados en la industria. El 4,4% de los establecimientos abarcaba el 61% de la mano de obra ocupada. De este total, el 37,5% correspondía al 1,5% de los establecimientos que podían considerarse como empresas grandes dado que cada uno empleaba más de 200 obreros.[11]

Si se considera la distribución porcentual de las empresas según el valor de la producción, se advierte que el 57,6% del total de la producción correspondía al 1,4% del total de las empresas, mientras que el 98,6% de éstas producía el 42,4% del valor total de la producción industrial. De manera más significativa, dentro del 98,6%, el 90% correspondía a los establecimientos artesanales, semifabriles y fabriles pequeños, que en conjunto producían el 16,4% del valor de la producción.[12]

Vemos entonces que en la década de 1930 existía un gran fraccionamiento dentro del empresariado industrial. Un reducido número de establecimientos respondía por más de la mitad de la producción industrial y empleaba a más de la mitad de la mano de obra ocupada. Como contrapartida, más del 90% de los establecimientos producía el 42,4% de la producción industrial y ocupaba casi el 40% de la mano de obra industrial. Esto tiende a indicar no sólo la existencia de un reducido sector de la burguesía industrial con un fuerte control sobre el proceso productivo, sino también el hecho de que la mayor parte de la misma estaba constituida por pequeños o medianos propietarios. En su conjunto, esta fracción controlaba una porción significativa de la producción industrial.

En síntesis, los datos del período permiten sostener la hipótesis de que este fraccionamiento se dio en torno a dos ejes centrales: el tamaño de los capitales y el origen extranjero o nacional de los mismos. La asociación

[11] *Ibid.*
[12] *Ibid.*

entre las grandes empresas industriales y el capital extranjero explicaría en buena parte la limitación de las orientaciones industrializantes de la UIA. En efecto, es un hecho que esta organización nucleaba básicamente a las grandes empresas manufactureras. La asociación de éstas con el capital extranjero explica que el modelo propuesto por la UIA no fuese más allá de una industrialización limitada a la sustitución de bienes de consumo no durable. Esta política era coherente con los intereses del capital extranjero en esa época. La crisis del comercio internacional acrecentó la importancia del mercado interno para el capital extranjero establecido en el país. Asimismo, una industrialización limitada a la sustitución de bienes de consumo no durable no planteaba el peligro de una eventual pérdida de mercados para los países centrales, en la medida en que estos se orientaban cada vez más hacia la exportación de bienes de capital, intermedios y de consumo durable.

De manera que, por diversos motivos, los intereses de las fracciones más poderosas del agro y de la industria tendieron a coincidir en torno a un modelo de desarrollo industrial limitado que puso el énfasis en la creación de industrias livianas. Si bien éste no significó una transformación radical de la estructura productiva, dio una respuesta coyuntural a la crisis del balance de pagos y ofreció una alternativa lucrativa al capital extranjero radicado en el país, sin amenazar seriamente el futuro de las exportaciones industriales de los países centrales a la Argentina. El potencial económico y político representado por la pequeña y mediana industria nacional era en aquel momento considerable. Sin embargo, su debilidad estructural y política era indiscutible. Esto se hacía patente en un hecho por demás significativo: la carencia de canales institucionales para expresar los intereses y reivindicaciones de ese sector social. No existía en esa época una organización corporativa o un partido político que representase a esta fracción de la burguesía industrial. Este fenómeno arroja luz sobre su incapacidad para oponerse al modelo de desarrollo industrial hegemónico o para formular uno alternativo. Pero lo anterior, no significa que este sector no haya eventualmente propiciado un modelo de desarrollo industrial más radical, uno que –enfrentando a los intereses del capital extranjero en el país y a los de la fracción agropecuaria más poderosa– tendiese a modificar sustancialmente la estructura productiva. Para que ello fuera posible resultó necesario que el modelo adquiriese vigencia a través del surgimiento de un fenómeno político nuevo: el peronismo. Incapaz de formular por sí misma un modelo de desarrollo industrial alternativo, la pequeña y mediana burguesía industrial

eventualmente se sumergiría en una coalición de clases que hizo del desarrollo nacional un objetivo prioritario.

El desarrollo de la acumulación del capital provoca necesariamente una creciente concentración y centralización de capitales. Ambos fenómenos se dan en forma conjunta. En la medida en que la competencia es la ley que rige el intercambio capitalista, y dado que ésta se da en razón directa al número de capitales y en razón inversa a su tamaño, tarde o temprano los pequeños capitales están condenados a desaparecer. La evidencia indica que hacia mediados de la década de 1930 existía una tendencia a la asociación entre la concentración del capital y las inversiones extranjeras en la industria. Ambos fenómenos representaban una amenaza a la supervivencia del pequeño y mediano capital industrial. En ese sentido, existían las condiciones para un enfrentamiento entre los intereses de ese sector y los del gran capital industrial. La importancia económica y social de los pequeños y medianos empresarios industriales puso en evidencia la existencia potencial de un conflicto. La Segunda Guerra Mundial estimuló en gran medida al proceso de industrialización y posibilitó que este conflicto emergiera a la luz del día.

El desarrollo industrial en un contexto caracterizado por una fuerte presencia de capital extranjero en el sector manufacturero generó divisiones y agrupamientos entre los sectores dominantes, que no estaban presentes en el modelo clásico de desarrollo capitalista. En la Argentina de la década de 1930 existía un actor social que estaba ausente en el modelo clásico de desarrollo capitalista: una fracción de pequeños y medianos capitales de origen nacional que veía amenazada su existencia por el desarrollo de grandes empresas vinculadas de diferentes modos al capital extranjero. Esto permite sostener la hipótesis de que la industrialización sin revolución industrial –es decir, la industrialización en un contexto de dependencia económica– no hizo desaparecer el antagonismo de intereses entre fracciones de la burguesía. El caso argentino parece indicar que, en lugar de provocar desde un inicio un enfrentamiento entre el capital agropecuario y el industrial, este tipo de industrialización dio origen a un enfrentamiento entre fracciones de la propia burguesía industrial. Ello creó las condiciones estructurales para la constitución de una alianza entre clases y fracciones de clase que tuvo por objetivo una transformación de la estructura productiva del país. Llegado el momento propicio, este objetivo se expresó políticamente a través del surgimiento del peronismo. El enfrentamiento entre el campo y el conjunto de la industria habría de concretarse en un momento

posterior de la industrialización argentina. En efecto, sólo cuando la industrialización entró en una etapa caracterizada por el liderazgo de las ramas más capital intensiva, la contradicción entre los intereses de la burguesía agropecuaria y los del conjunto de la burguesía industrial pasaría a ocupar el primer plano en el escenario de los conflictos interburgueses.

Un nuevo actor social: la clase obrera

Como se vio en la primera parte de este capítulo, en el período analizado, la acumulación del capital se caracterizó por una composición orgánica del capital relativamente estable, lo cual determinó una creciente accesibilidad del mercado de trabajo industrial y trajo aparejado un considerable aumento de la ocupación industrial. Este fenómeno coincidió con que los salarios permanecieron estancados a un nivel bajo. Así, por ejemplo, entre 1929 y 1942, los salarios de los obreros industriales evolucionaron a una tasa de incremento acumulativo anual del 0,07%.[13] Paralelamente, desde 1936, la afiliación sindical creció significativamente. La sindicalización del movimiento obrero adquirió mayor envergadura en la década de 1940, especialmente a partir del acceso del peronismo al gobierno en 1946. El período también se particularizó por un crecimiento de la movilización obrera en demanda de reivindicaciones, que en su mayor parte no fueron satisfechas. En efecto, a excepción de lo sucedido en 1935, la mayoría de las huelgas de la década fueron transigidas o perdidas.[14] El bajo nivel en que se mantuvo el salario real tiende indicar que a pesar de la progresiva movilización y de la mayor sindicalización obrera, la capacidad de negociación de este sector social era poco significativa.[15]

Otro rasgo característico de la época fue el enfrentamiento entre tendencias dentro del movimiento sindical. Por un lado, existía una corriente

[13] Calculado sobre la base del salario real obrero dato que se encuentra en Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo, op. cit.*

[14] *Ibid.*

[15] El análisis de la evolución de la composición orgánica del capital y de los salarios indica que en el período en estudio existía una reserva de fuerza de trabajo lo suficientemente considerable como para permitir mantener los salarios en un nivel bajo y así impulsar la acumulación del capital. Esto contradice la hipótesis de la inexistencia en la Argentina de una reserva de fuerza de trabajo sostenida por Carlos Waisman en *Reversal of Development in Argentina, postwar counterrevolutionary policies and their structural consequences*, Princeton, Princeton University Press, 1987.

que pretendía mantenerse al margen de la influencia de los partidos políticos y transformar el movimiento sindical en un grupo de presión capaz de actuar no sólo en el área específicamente sindical, sino también en la política. Es decir, intentaba utilizar a los sindicatos como herramienta de acción en la arena política. Había además otra tendencia sindical, que pretendía subordinar la lucha a los objetivos político parlamentarios de los partidos de izquierda. Cuando la III Internacional lanzó la consigna de *Democracia o Fascismo*, esta segunda tendencia subordinó la lucha por las reivindicaciones económicas a las consignas antifascistas. En circunstancias en que las condiciones laborales se caracterizaban por una explotación extensiva de la jornada de trabajo, la subordinación de las reivindicaciones económicas de la clase obrera a una consigna antifascista habría de crear las condiciones para que la otra tendencia sindical adquiriese hegemonía ideológica y política dentro del movimiento obrero. El defasaje entre las consignas antifascistas y las reivindicaciones económicas en un contexto de creciente malestar y explotación obrera habría de legitimar, a nivel ideológico, la preeminencia de la lucha sindical y de la utilización política de los sindicatos.

La demanda de mayor participación en la toma de decisiones políticas a través del accionar de los sindicatos entraría en abierta contradicción con el modelo de desarrollo oficial. La industrialización limitada, en la medida en que no tenía como eje central la ampliación del mercado interno, presuponía un techo inamovible para las reivindicaciones obreras. El estancamiento del salario real a un nivel muy bajo, a pesar del aumento de la demanda de fuerza de trabajo que registra el período, tiende a evidenciar el rol limitado que el modelo oficial adjudicaba al aumento del consumo popular. La intransigencia gubernamental ante las reiteradas demandas de participación de los sindicatos en el sistema de decisiones, y de mejoramiento de las condiciones de trabajo, evidenciaron que en el modelo de desarrollo de la elite gobernante la clase obrera no tenía un rol importante. Sin embargo, esta situación no habría de perdurar.

La revolución militar de 1943 cambió drásticamente las condiciones económicas y políticas en que se ejerció la lucha obrera. En efecto, desde el punto de vista de la evolución del mercado de trabajo, la primera mitad de la década se caracterizó por un crecimiento constante del nivel ocupacional, que desde 1943 se acompañó de un importante aumento del salario real. Así, por ejemplo: si a lo largo de la década de 1930 hasta principios de los años cuarenta, los salarios obreros permanecieron estancados en un

nivel muy bajo, entre 1943 y 1945 éstos crecieron a una tasa acumulativa anual del 3,31%. Ese súbito incremento salarial denotó un cambio de actitud de la elite gobernante frente al rol que la clase obrera debía jugar en el desarrollo económico. Hacia principios de la década de 1940, las posibilidades de crecimiento económico a partir de la aplicación de una estrategia de desarrollo industrial limitado parecían haberse agotado. Al disminuir las posibilidades de sustitución de importaciones y volverse evidente el peligro que acechaba a la industria nacional ante el previsible incremento de la competencia extranjera después de la Segunda Guerra Mundial, la ampliación del mercado interno se convirtió en el principal recurso para impulsar la acumulación del capital. En esas circunstancias, esto sólo podía darse a través de una política redistributiva de ingresos destinada a aumentar la demanda interna a partir de la incorporación masiva de los sectores populares al consumo. Esta alternativa fue percibida por una facción del Ejército liderada por un coronel que ejercía el cargo de secretario de Trabajo del nuevo gobierno militar. Al decir del coronel Perón:

> La República Argentina produce en estos momentos el doble de lo que consume, es decir, la mitad de lo que produce sale al exterior. Yo me pregunto si cuando termine la guerra será posible seguir colocando nuestros productos en Sudáfrica, Canadá, Centro y Sudamérica, en competición con los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia, etc. Cuando ya no sea posible exportar, si consumimos sólo el 50%, ¿cuál será la situación de nuestra industria y de nuestra producción? Habrá una paralización del 50% y veremos a un millón de argentinos desocupados que no tendrán en qué trabajar ni con qué vivir. No habrá otro remedio que aumentar el consumo. Y el consumo, en una circunstancia tan extraordinaria como la que se nos va a presentar, solamente podrá aumentarse elevando los sueldos y salarios para que cada uno pueda consumir mucho más de lo que consume actualmente y permitiendo que cada industrial, cada fabricante, cada comerciante pueda a su vez producir lo mismo que hoy sin verse obligado a parar las máquinas y despedir a los obreros. Los organismos del Estado se hallan abocados al estudio de estas posibilidades.[16]

En síntesis, se puede decir que en la década de 1930 se gestaron las condiciones estructurales para la formación de una alianza de clases orientada hacia un modelo de desarrollo industrial radicalmente opuesto al de la elite gobernante. Los dos actores sociales interesados en un desarrollo nacional: las fracciones pequeñas y medianas de la burguesía industrial nacional y la clase obrera consolidaron su presencia en la coyuntura. Hacia comienzos de la década de 1940, el agotamiento de las posibilidades de desarrollo a partir del modelo industrial en vigencia creó las condiciones para que un proyecto de desarrollo industrial alternativo empezara a emerger. A fin de comprender su súbita vigencia política, tendremos que introducirnos en el análisis de las principales características de la escena política.

[16] Citado en Gonzalo Cárdenas *et al.*, *El peronismo*, Buenos Aires, Carlos Pérez, 1969, pp. 233 y 234.

Deterioro de la legitimidad institucional

El año 1930 marca la irrupción de los militares en la política argentina luego de casi quince años de sucesión ininterrumpida de gobiernos constitucionales elegidos democráticamente. Con este golpe militar se inicia un período político que pasó a la historia con el nombre de "década infame". La proscripción política del Partido Radical depuesto, el sistemático fraude electoral, los escandalosos negociados económicos del oficialismo con empresas extranjeras, las irregularidades cometidas por los frigoríficos extranjeros (evasión impositiva, ocultamiento de utilidades, etc.) que llevaron a un debate en el Senado en el cual fue muerto a balazos un legislador opositor, la escandalosa prórroga de las concesiones de servicios eléctricos de las compañías extranjeras CADE e Ítalo Argentina son algunos de los acontecimientos que marcan el período. A esto habrá que agregar, por su significación, la división del proscrito Partido Radical y la posterior participación de una de sus facciones (la alvearista) en el "fraude patriótico". Estos rasgos pusieron en evidencia la crisis de legitimidad del sistema institucional. Las causas de ese fenómeno pueden haber sido muy diversas. A nuestro juicio, la razón principal del desmoronamiento institucional habrá que encontrarla en la existencia de dos actores sociales que, teniendo intereses antagónicos a los de la elite gobernante, carecían de canales institucionales para expresar su protesta. Tanto la clase obrera como la pequeña y mediana burguesía industrial no tenían una organización –corporativa o política– que pudiese hacer valer su voluntad de participación en el sistema de decisiones políticas. Más aún, el crónico fraude electoral impedía el acceso de estos sectores sociales al poder político

a través de elecciones genuinamente democráticas. El bloqueo de toda posibilidad de expresión de actores sociales que tenían intereses antagónicos a los de la alianza de clases en el poder explicaría el progresivo deterioro de la legitimidad institucional. En este contexto de enfrentamientos sociales, las demandas obreras ponían a la orden del día la posibilidad de emergencia de un conflicto social que podía eventualmente amenazar las bases de sustentación del sistema de dominación. Tal como funcionaba, el sistema de dominación era incapaz de asegurar una transición fluida entre modelos de desarrollo divergentes. Esto sólo fue posible a partir de un nuevo golpe militar en junio de 1943 que, a diferencia del de septiembre de 1930, posibilitó la casi inmediata prevalencia hegemónica del sector nacionalista del Ejército.

Los principales protagonistas de este golpe pretendieron poner fin al deterioro de la credibilidad de la elite gobernante y del sistema institucional, y evitar la posible emergencia en estas condiciones de un conflicto social totalmente disruptivo. El *Manifiesto al Pueblo,* dado a conocer al lanzarse la revolución de 1943, sostenía:

> En lo más íntimo y puro de las conciencias argentinas pesa una honda y angustiosa inquietud, ante la evidente convicción de que una corrupción moral se ha entronado en los ámbitos del país, como sistema. El capital usurario impone sus beneficios con detrimento de los intereses financieros de la Nación, bajo el amparo de poderosas influencias de encumbrados políticos argentinos, impidiendo su resurgimiento económico. El comunismo amenaza sentar sus reales en un país pletórico de probabilidades por ausencia de previsiones sociales. La Justicia ha perdido su alta autoridad moral, que debe ser inmarcesible. Las instituciones armadas están descreídas.

Refiriéndose al nuevo fraude electoral planeado por el presidente Castillo para delegar el gobierno en otro candidato de la Concordancia Conservadora, el *Manifiesto* sostenía: "No es posible que el proyectado futuro gobierno de la Nación pudiera remediar tan graves males, cuando los hombres que van a actuar y colaborar en las funciones de gobierno son y serán los mismos responsables de la situación actual, atados a compromisos políticos y a intereses creados y arraigados", en estas circunstancias, a los oficiales del Ejercito y de la Marina "les resultaría más cómoda una actitud de indiferencia, enmascarada en la legalidad, pero el patriotismo, como en épocas pretéritas impone en esta hora de caos internacional y de corrupción interna salvar las Instituciones del Estado y propender a la grandeza moral y material de la Nación".[17]

En síntesis, la coyuntura de principios de los años cuarenta se caracterizó por una creciente perdida de credibilidad del sistema institucional y de la elite gobernante. El agotamiento del modelo de aumento vigente, la necesidad de ampliar el mercado interno para asegurar el aumento de la acumulación del capital, el estricto bloqueo a la posibilidad de expresión de los intereses de nuevos actores sociales enfrentados al modelo de desarrollo industrial vigente y el contexto general de desmoronamiento de la credibilidad en las instituciones del país son, a nuestros juicio, factores esenciales respecto del surgimiento de una nueva alianza de clases en el poder: el peronismo. Se generó así una situación caracterizada por la coexistencia de diferentes intereses de clase enfrentados en una sorda lucha y en un contexto institucional crecientemente ilegítimo. Esta situación puso a la orden del día la posibilidad de emergencia de un conflicto social imposible de asimilar por el sistema de dominación vigente: el enfrentamiento entre el capital y el trabajo asalariado. El equilibrio inestable entre clases y fracciones de clase en pugna favoreció las condiciones para la aparición del fenómeno que Antonio Gramsci designara con el nombre de "cesarismo".[18] Es decir, para que el Estado (y en este caso particular, una facción del Ejército) asumiese una función de "arbitraje" en la lucha, una función de defensa del interés general por encima de los intereses sectoriales en pugna. La misma fue ejercida por el ala nacionalista del Ejército liderada por el general Perón, quien pretendió aglutinar una coalición de intereses en torno a un nuevo modelo de desarrollo industrial. Como se verá a continuación, su principal objetivo fue imponer una conciliación entre los intereses del capital y los del trabajo asalariado a fin de garantizar el desarrollo de la industria nacional.

El peronismo y la conciliación entre los intereses de la burguesía nacional y los de la clase obrera

Uno de los objetivos perseguidos por el gobierno peronista fue la industrialización acelerada del país. Para ello instrumentó una política económica

[17] Citado en Gerardo López Alonso, *1930-1980. Cincuenta años de historia argentina. Una cronología básica*, Buenos Aires, Belgrano, 1982.

[18] Antonio Gramsci, *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*, Buenos Aires, Lautaro, 1962.

destinada a superar las restricciones del mercado interno, las cuales amenazaban con una crisis de recesión a la industria nacional. Esta política económica se articuló en torno a dos medidas de importancia central para comprender la estructura de la alianza de clases en el poder: la traslación de ingresos desde el sector agropecuario al industrial y la redistribución de mismos hacia el sector asalariado.

El peronismo y las distintas fracciones de la burguesía

El gobierno pretendió financiar el desarrollo industrial a través de una transferencia de los términos del intercambio interno a favor de la industria. A tal efecto, creó un organismo: el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), destinado a monopolizar las exportaciones agropecuarias. Por medio de un estricto control de cambios y de la fijación de los precios internos de los productos agropecuarios, el IAPI obtuvo ingentes beneficios que fueron destinados a financiar el plan de industrialización. Esta institución compraba a los productores a precios fijos y posteriormente revendía los productos a precios internacionales. Los precios pagados a los productores agropecuarios fueron tan rígidos que no permitieron que estos se beneficiaran del mejoramiento de los términos del intercambio producido al finalizar la Segunda Guerra Mundial. A título de ejemplo, en 1948 el gobierno vendió a los Estados Unidos 200.000 toneladas de girasol al precio de 101,25 pesos la tonelada; el precio fijado a los productores era por ese entonces de 14 pesos la tonelada. La diferencia entre el precio pagado a los productores locales y el obtenido al vender los productos en el mercado internacional constituyó una fuente de recursos que hizo posible el subsidio fiscal e impositivo al desarrollo industrial. Esta política de precios trajo aparejado un creciente deterioro del poder adquisitivo de los granos en el mercado local. Entre 1948 y 1952, su valor cayó el 36 por ciento.

El monopolio oficial de la exportación de productos agropecuarios y la fijación de precios internos a estos en niveles muy inferiores al precio internacional habría de encrespar al sector más poderoso de la burguesía agropecuaria. Estas disposiciones oficiales tendían a debilitar el poder económico del mismo. Hubo además otras medidas que alimentaron el rencor de la gran burguesía agropecuaria, entre ellas, cabe mencionar el Estatuto del Peón y la reforma agraria. Con la promulgación de la primera medida, el gobierno

pretendió alterar drásticamente las relaciones paternalistas imperantes en el campo, socavando de este modo la legitimación del poder económico del sector. El Bando de Oliden promulgado en 1815 obligaba a todo individuo del campo a servir a un patrón. Desde aquel entonces no se había vuelto a legislar sobre la materia. El Estatuto del Peón pretendía institucionalizar la relación patrón-peón a través de un organismo: la Comisión Nacional del Trabajo Rural, compuesto por representantes de los patrones y de los peones, quienes anualmente negociaban las condiciones de trabajo y los salarios. Los peones estaban representados en esta comisión por sus gremios a través de la Federación Argentina de Seccionales Agrarias, afiliada a la Confederación General del Trabajo (CGT). El Estatuto introdujo así dos hechos nuevos: la agremiación sindical en el campo y la discusión en un marco institucional no sólo referida a los salarios sino también a las condiciones de trabajo. Por primera vez en la historia argentina los trabajadores rurales obtuvieron vacaciones pagas, jornada laborable de ocho horas, descanso dominical, sueldos mínimos, indemnización por despido, seguridad e higiene, etcétera.

Conjuntamente con estas políticas, el gobierno agitó la posibilidad de realizar una reforma agraria. Sin embargo, ésta no llegó a alterar drásticamente la base del poder agropecuario, que era la distribución de la tierra en las zonas más fértiles. En efecto, esta reforma quedó reducida a la colonización de tierras fiscales y de una pequeña parte de latifundios no explotados. Los de la zona pampeana, base del poder económico de la fracción más poderosa de la burguesía agropecuaria, no fueron afectados. A pesar de las limitaciones evidentes de la reforma agraria, el simple hecho de que la misma formara parte de la política oficial fue suficiente para activar el enfrentamiento del sector agropecuario. Bien pronto, el descontento del campo se expresó a través del boicot a la siembra. Esto trajo aparejado una reducción muy grande del área sembrada que obligó al gobierno, hacia 1953, a incentivar la producción agrícola a través de un aumento en los precios de estos productos. A pesar de ello, durante todo el período, los precios agropecuarios sufrieron un fuerte deterioro en relación con los del sector industrial (véase cuadro 1.7).

Diversos elementos c/ sectos, fenomenos pero incapacidad de eliminar su centralidad estructural en la dinámica del modelo de acumulación.

CUADRO 1.7. *Precios relativos, 1946-1965 (1939=100).*

	Índice de precios mayoristas no agropecuarios/ índice de precios mayoristas agropecuarios
1946	88,7
1947	100,0
1948	105,6
1949	120,0
1950	126,9
1951	120,0
1952	140,0
1953	127,2
1954	131,2
1955	137,2
1956	113,4
1957	112,5
1958	110,4
1959	98,6
1960	102,1
1961	106,3
1962	98,9
1963	92,5
1964	90,8
1965	108,2

Fuente: Carlos Alejandro Díaz, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic, Statistical Appendix*, New Haven, Yale University Press, 1970.

La actitud del gobierno hacia el sector agropecuario contrasta con el aliento dado al desarrollo del sector industrial. Al mejoramiento de los precios relativos de la industria se sumaron los subsidios fiscales e impositivos y la fuerte protección a la industria nacional. La alta protección arancelaria permitió que las empresas industriales transfiriesen a los precios los aumentos salariales otorgados por el gobierno. El alto nivel salarial posibilitó la expansión del mercado interno y en particular la producción de bienes de consumo. Paradójicamente, estas medidas no lograron provocar el apoyo activo de la burguesía industrial. Por un lado, la fracción más poderosa se opuso desde un principio al gobierno; más aún, constituyó uno de los principales apoyos financieros de la oposición al peronismo en las elecciones de 1946. La asociación de este sector con las grandes empresas de capital extranjero es uno de los factores que probablemente explican esta actitud, pues otro rasgo típico del gobierno peronista fue su abierto nacionalismo y su oposición al papel tradicionalmente ocupado por el capital extranjero en la política argentina. Además, el gobierno nacionalizó los servicios públicos vinculados a la infraestructura económica (ferrocarriles ingleses y franceses, International Telegraph and Telephon Corporation, etc.) y pretendió controlar los recursos financieros. Si bien la política financiera del período benefició al sector industrial, el principal destinatario de esta política de crédito subsidiado fue precisamente la pequeña y mediana fracción de la burguesía industrial. Para la fracción más poderosa de la burguesía industrial, esta política significó la pérdida de su monopolio sobre las fuentes de financiación. Otras medidas adoptadas –como por ejemplo, las restricciones impuestas a las inversiones extranjeras en la industria y a la remesa al exterior de las ganancias obtenidas localmente– también tendieron a poner un límite a la influencia económica de este sector.

Al nacionalizar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) (dirigido hasta ese entonces por un directorio compuesto en su mayoría por representantes de los bancos extranjeros más importantes con filiales en el país) y al centralizar el sistema de seguros en un cuasi monopolio estatal, el Estado se aseguró el control financiero y se transformó así en el principal instrumento del crédito. Los bancos privados se convirtieron en meros agentes del BCRA, percibiendo una comisión por sus actividades. El crédito al sector privado adoptó la forma de redescuentos otorgados por el BCRA a tasas de interés diferentes según los distintos sectores económicos. La emisión de dinero estuvo bajo el control directo del BCRA. Asimismo, la cantidad de crédito fue estipulada por la autoridad monetaria independientemente del nivel alcanzado por los depósitos. El redescuento se transformó en el principal instrumento de orientación del crédito, y siguió los lineamientos de la estrategia industrial del gobierno. Este sistema, establecido en 1946, provocó un importante crecimiento de la financiación otorgada a la industria. Con anterioridad a la reforma financiera de 1946, el crédito a mediano y largo plazo era prácticamente inexistente. Esta situación cambió de manera drástica a partir de la creación del Banco de Crédito Industrial, orientado básicamente hacia el apoyo a la fracción pequeña y mediana de la burguesía industrial. Durante el gobierno peronista, este banco incrementó enormemente su participación en el total de los préstamos otorgados al

sector industrial. La situación así descripta habría de revertirse significativamente luego de la caída de este gobierno y en particular en la década de 1960.[19] Otro rasgo típico de la política de créditos del período fue el constituirse en un verdadero subsidio. Las tasas de interés eran establecidas por el BCRA y, con la excepción de los años 1953 y 1954, fueron fuertemente negativas. Las ramas productoras de bienes de consumo no durable fueron las principales beneficiarias del crédito subsidiado.

En síntesis, si bien la gran industria se benefició con la política global de incentivos al sector industrial, otras políticas específicas tendieron a disminuir su influencia económica y alimentaron su enfrentamiento con el gobierno. El intento oficial de impulsar la agremiación independiente de la pequeña y mediana industria nacional habría de contribuir todavía más a enardecer a la fracción más poderosa. Desde comienzos de la década de 1940 existían, conjuntamente con la UIA, una serie desperdigada de cámaras, centros o uniones que agrupaban a los empresarios de una industria específica en una localidad determinada. La diversificación regional y por sectores era tan grande que permitía a la UIA adjudicarse el rol de único vocero de la industria. Más aún, los distintos gobiernos del período sólo reconocieron a esta organización corporativa como el interlocutor válido de la industria. Una de las primeras medidas del gobierno peronista fue la intervención oficial de la UIA y la creación de distintos niveles de agremiación con el objeto de dar una organización sectorial al pequeño y mediano empresario industrial. Por un lado, se crearon federaciones de empresarios por industrias que pretendían absorber las cámaras por sectores de industria, tanto a nivel regional como nacional, aumentando así la representatividad sectorial. Por el otro lado, se conformaron organizaciones empresariales a nivel provincial. Finalmente, se intentó, con variado éxito, crear una organización a nivel nacional, la Confederación General Económica (CGE), que nuclearía al pequeño y mediano empresario en el sector agropecuario, industrial y comercial.

A pesar del apoyo dado a la pequeña y mediana industria nacional, el gobierno no consiguió una adhesión activa de este sector. Si bien el mismo respaldó indudablemente la política oficial, este apoyo fue pasivo. La pasividad del pequeño y mediano empresario nacional ha sido un rasgo característico de la historia contemporánea. Lo que resulta más llamativo en el

[19] Marta Beckerman, "Financial markets and industrialization in Argentina: a conflictive relationship", ponencia presentada en la Conferencia de LASA, Boston, 1986.

período peronista es que por primera vez este sector fue erigido como interlocutor privilegiado del gobierno. Tal vez esta incapacidad para expresarse en forma activa derive del fraccionamiento de la burguesía industrial argentina como consecuencia de un proceso de industrialización "sin revolución industrial", caracterizado desde un inicio por una fuerte presencia del capital extranjero. Esta situación habría sido un obstáculo al accionar independiente del pequeño y mediano empresario industrial.

El peronismo y la clase obrera

La política económica del gobierno peronista significó un mejoramiento incuestionable de la situación de la clase obrera. En la primera sección de este capítulo hemos visto que la tasa de plusvalía disminuyó bruscamente en los primeros años de este gobierno, para luego permanecer relativamente estable en un nivel muy inferior al nivel histórico. Por otra parte, se registró un crecimiento del empleo obrero e incrementos sistemáticos de los salarios reales. Mientras que entre 1931-1939 la tasa de incremento anual acumulativo del empleo industrial fue del 3,3% y en 1940-1945 fue del 3,8%, entre 1946-1950 fue del 4,8%.[20] Asimismo, según estimaciones de Eprime Eshag y Rosemary Thorp:

> El alza de los salarios reales de empleados públicos entre 1945 y 1948 se estima en un 35%, y el de los ingresos reales de obreros industriales, en un 50%. Ambos incluyen grandes aumentos de los beneficios de seguridad social y causaron una importante redistribución de ingresos en favor de los asalariados. Como resultado de ello, y también como consecuencia del mayor empleo tanto en el sector privado como en el público, el consumo creció en el mismo período en más de un 20 por ciento.[21]

[20] Para el período 1930-1945, las estimaciones se basan en los índices de empleo obrero según Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo*, *op. cit*. Para 1946-1950, los cálculos se basan en estimaciones de empleo en el sector de la industria manufacturera provistos por el Consejo Nacional de Desarrollo Económico (CONADE). Aunque los datos del primer período son para Buenos Aires y los del segundo, para todo el país, creo que la comparación es válida, ya que en las décadas de 1930 y comienzos de la de 1940 la mayor proporción de la población industrial se concentraba en Buenos Aires.

[21] Eprime Eshag y Rosemary Thorp, *Los planes de estabilización en la Argentina*, Buenos Aires, Paidós, 1969.

Si bien hacia principios de la década de 1950 estas tendencias empezaron a revertirse, considerando el período en su conjunto, es posible afirmar que se produjo una importante redistribución de ingresos hacia los asalariados. La participación de la remuneración del trabajo en el ingreso neto industrial paso del 44,8% en 1944 al 58% en 1954. Paralelamente, la participación de las utilidades de las empresas en el total del ingreso neto industrial descendió del 55,2% al 42 por ciento.

La política económica benefició a la clase obrera asegurándole un nivel ocupacional y salarios muy superiores a los logrados en períodos anteriores o posteriores a esta experiencia de gobierno. A esto habrá que agregar el radical mejoramiento de las condiciones de trabajo. Los derechos acordados a los trabajadores quedaron institucionalizados en la Constitución de 1949. Estos incluían, entre otros, la reglamentación de la jornada de trabajo en 48 horas semanales y ocho horas diarias, indemnización por despido, aguinaldo, vacaciones pagas, etc. Entre las disposiciones más importantes, cabe mencionar la Ley de Asociaciones Profesionales que otorgó una importancia sin precedentes en la historia argentina a la participación de los sindicatos en la toma de decisiones. De acuerdo con esta ley, los sindicatos con personería gremial podían beneficiarse de una serie de derechos que les permitían, en la práctica, regular el mercado de trabajo. Una de sus cláusulas establecía que podían participar en actividades políticas, ajustándose para ello a las leyes establecidas para las elecciones. Otra cláusula les aseguraba la posibilidad de colaborar con el Estado en organismos técnicos y de asesoramiento económico.

Como resultado de estas políticas, se produjo una sindicalización masiva. Se estima que hacia 1947 la Confederación General del Trabajo (CGT) contaba con 1.500.000 de afiliados, mientras que en 1951 ascendían a 3 millones. Esta sindicalización tuvo un impacto considerable a nivel de la dirigencia sindical. Los dirigentes comunistas y socialistas que, siguiendo las directivas de sus respectivos partidos políticos, se opusieron al general Perón fueron rápidamente desplazados por dirigentes leales surgidos de las nuevas camadas de afiliados. A su vez, el gobierno alentó la formación de sindicatos paralelos en aquellos gremios reacios a la política oficial y dirigidos por líderes que no pudieron ser desplazados.

Puede decirse que uno de los principales objetivos del gobierno peronista fue la institucionalización de los sindicatos como órgano de expresión

obrera en la actividad económica y política del país. Por un lado, se transformaron en la mediación necesaria para reglar la relación empresario-obrero ya no a nivel local, sectorial o regional, sino específicamente nacional. Fueron el instrumento de expresión del conjunto de la clase obrera y no simplemente de sectores de la misma. En tanto tal, los sindicatos gozaron de un poder de negociación inédito hasta entonces y de un considerable control sobre el mercado de trabajo. Esto fue consecuencia no sólo de la política de sindicalización masiva estimulada por el gobierno, sino también de la propia política de industrialización. Es sabido que las condiciones de pleno empleo tienden a aumentar considerablemente la capacidad de presión de los gremios y, por lo tanto, su posibilidad de incidir en las decisiones económicas que se toman. Más aún, la necesidad de estimular la acumulación ampliando el mercado interno a partir del mayor consumo de los sectores populares habría de dar a estos una capacidad de presión política de la que habían carecido hasta ese entonces. Entre 1946 y 1954, la clase obrera gozó de un nivel de empleo y de salarios como nunca antes o después en la historia del país.

La institucionalización de las reivindicaciones políticas obreras a través de los sindicatos entroncó con una antigua tendencia dentro del sindicalismo orientada a transformar los gremios en eje político de la clase obrera. Entre 1943 y 1946, se estructuró el apoyo del movimiento gremial a las propuestas del general Perón. En un principio, este respaldo fue eminentemente pasivo y tenía como eje central el reconocimiento de las mejoras económicas y sociales otorgadas por Perón desde la Secretaria de Trabajo y Previsión. Sin embargo, muy pronto el apoyo se convirtió en una movilización activa, cuyo principal objetivo fue el reclamo de la participación obrera en la toma de decisiones. El 16 de junio de 1945 se dio a conocer el *Manifiesto de las Fuerzas Vivas* firmado por 319 entidades patronales. El mismo atacaba duramente la política social del gobierno. La respuesta sindical no se hizo esperar y en los días siguientes se publicaron declaraciones de los principales sindicatos en defensa de los derechos del trabajador y apoyando al gobierno. Esta movilización culminó con una concentración callejera el 12 de julio en la que los dirigentes obreros expresaron, entre otros conceptos: "No estamos conformes con que se hable en nuestro nombre, vamos a hablar por nosotros mismos. Y nosotros hemos resuelto que el movimiento sindical argentino, colocándose a la altura de los más adelantados del mundo, gravite en la solución de los problemas políticos, económicos e ins-

titucionales de la República. Y va a gravitar con absoluta independencia".[22] Gravitar con absoluta independencia, éste fue el principal problema que enfrentó el movimiento obrero en el período. Pronto habrían de evidenciarse los límites impuestos por el gobierno a la capacidad de expresión de los intereses obreros en forma independiente de la política oficial o de los intereses de otros sectores sociales.

La voluntad oficial de transformar a los sindicatos en órgano político de la clase obrera se hizo patente muy temprano. En efecto, en octubre de 1945, la ley 23.852 reconoció el derecho de los sindicatos a participar en la vida política del país. El artículo 33, inciso 6, de esta ley establecía como derecho inalienable de toda organización gremial: "el de participar circunstancialmente en actividades políticas siempre que así lo resuelva una asamblea o congreso. Sólo en el caso de que la asociación profesional decidiera una participación permanente y continuada en la actividad política, deberá ajustarse además a las leyes, decretos y reglamentaciones que rijan a los partidos políticos". En otros términos, los sindicatos contaban, entre sus derechos, el de ejercer actividades políticas en forma "circunstancial". En caso de pretender ejercerla de manera continuada, podrían constituirse en un partido político. Esto ocurrió luego de la movilización del 17 de octubre, al crearse el Partido Laborista, plataforma del general Perón en las elecciones generales de febrero de 1946. La carta orgánica de este partido –aprobada en una reunión en la que participaron más de 200 dirigentes gremiales– establecía que estaría integrado por sindicatos, agrupaciones gremiales, centros políticos e individuos. Se negaba el ingreso de "personas con ideas reaccionarias o totalitarias" y a los integrantes de la oligarquía.[23] El programa consideraba como enemigo del partido "a la minoría constituida por latifundistas, hacendados, industriales, comerciantes, banqueros, rentistas y a todas las variedades del gran capitalismo nacional o extranjero". Frente a ellos, la clase "laborista" estaba constituida por "obreros, empleados y campesinos, juntamente con profesionales, artistas e intelectuales, así como pequeños comerciantes industriales y agricultores". El partido pretendía organizar esta clase laborista pero reconocía que su columna principal estaba constituida por las "grandes masas integrantes de los sindicatos de trabajadores".

[22] Citado en Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero, *Estudios sobre los orígenes del peronismo, op. cit.*

[23] *Ibid.*

La disolución del Partido Laborista una vez ganadas las elecciones, y su reemplazo por el Partido Justicialista, fue un paso más de la política tendiente a encuadrar las reivindicaciones políticas obreras a través de sindicatos controlados por el gobierno. Más aún, puso fin al intento de participación autónoma de los obreros en las decisiones de gobierno. Definimos a la autonomía de las orientaciones obreras como la capacidad de postular objetivos o reivindicaciones que pueden entrar en contradicción con los intereses de las clases dominantes. Determinadas condiciones estructurales posibilitan el surgimiento de la autonomía obrera. Entre éstas, cabe mencionar la existencia de un proceso de acumulación del capital basado en una drástica regresión de los ingresos y el bloqueo de la posibilidad de expresión de la protesta social dentro de los canales institucionales del sistema. Cuando estos dos procesos se dan conjuntamente, existe la posibilidad de que los intereses obreros se expresen en forma autónoma. La década de 1930 se particularizó por la coexistencia de estos procesos. No es pues de extrañar que en aquel contexto surgiera, dentro del movimiento obrero organizado y ganara hegemonía, una tendencia sindical que pretendía participar en forma autónoma en las decisiones de gobierno. Este objetivo se enfrentó antagónicamente al modelo de desarrollo propuesto por la elite conservadora en el poder. La respuesta oficial consistió en la represión económica y política.

Hacia mediados de la década de 1940, la voluntad de participación en la toma de decisiones no era propiedad exclusiva del gremialismo. La movilización espontánea de las bases obreras el 17 de octubre de 1945 prueba que este deseo era compartido por las bases del movimiento obrero. El 19 de septiembre, luego de la marcha por la Constitución y la libertad, organizada por los partidos y sectores opuestos a Perón, sobrevino un golpe militar y la destitución y el posterior encarcelamiento de Perón en la Isla Martín García. Los días subsiguientes fueron de intensa tensión y agitación gremial, culminando el 16 de octubre con una reunión de la Comisión Central Confederal de la CGT a fin de decidir si se realizaba o no un paro general en apoyo a Perón. La reunión fue muy borrascosa, pues los sindicalistas estaban divididos. Finalmente, la huelga fue aprobada para el día 18 de octubre, pero el resultado de la votación dio muestras de la disparidad de opiniones: 21 votos a favor de la huelga, 19 en contra. Entre los objetivos de la huelga, en ningún caso se mencionó la liberación del general Perón y su restitución al poder. Sin embargo, ésta fue la consigna que enarboló el pueblo que se volcó masivamente a la calle un día antes del previsto por los diri-

gentes sindicales. Se ha dicho que Eva Perón y Cipriano Reyes –dirigente del gremio de la carne– fueron los responsables de esta movilización. Sin duda alguna, tuvieron un rol destacado, pero sus esfuerzos habrían sido en vano si no hubiese existido en las bases obreras esta voluntad de expresarse, de hacer oír sus demandas específicas. Los principales protagonistas del 17 de octubre fueron los obreros que, desde las calles de Buenos Aires, impusieron la libertad de Perón y su vuelta al poder a través de la convocatoria a elecciones generales, sin proscripciones ni fraude electoral.

La alianza de clases en el poder

El peronismo se constituyó a partir de la alianza entre los intereses de la fracción nacional de la burguesía industrial y los de la clase obrera. Ésta fue impulsada por una elite liderada por el general Perón. El objetivo estratégico perseguido por esta coalición fue la conciliación entre los intereses del capital y los del trabajo asalariado. Al decir del general Perón en un discurso dado el 1° de mayo de 1944:

> Sobre el frontispicio del antiguo Palacio del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires pudo haberse estampado esta leyenda: "Ésta es la verdadera casa de los hombres que trabajan". Y junto a esta leyenda que abría de par en par las puertas de la sede del trabajo a todos los que llegaban hasta ella, esta afirmación, que fue la consigna severa a la que ajustamos nuestra labor desde entonces: "Buscamos suprimir la lucha de clases suplantándola por un acuerdo justo entre obreros y patrones al amparo de la justicia que emana del Estado".[24]

A fin de suprimir la lucha entre el capital y el trabajo asalariado, el gobierno institucionalizó a los sindicatos como órganos de expresión política de los obreros. Esto, conjuntamente con una política de redistribución de ingresos hacia los asalariados, explica, a nuestro juicio, la progresiva subordinación de los intereses de los obreros a los de la fracción nacional de la burguesía. La voluntad de participar con autonomía en las decisiones de gobierno se transformó bien pronto en una participación delegada; es decir, subordinada a los objetivos de la elite que tenía la hegemonía política dentro de esta alianza. La participación obrera en el gobierno a través de sindicatos controlados por el Estado fue el medio que garantizó una paz social indispensable para el desarrollo nacional en la coyuntura de posguerra. Más aún, otorgó al gobierno el apoyo activo de un sector social decisivo, en circunstancias en que la pasividad de la burguesía nacional amenazaba una estructura de poder seriamente cuestionada por los sectores más poderosos del empresariado. En un discurso pronunciado el 24 de septiembre de 1952, acosado ya por los conatos de golpe de Estado y la verborragia de la oposición, el general Perón habría de reconocer:

> Nuestro apoyo como sistema está basado, precisamente, en esas dos fuerzas: la política, que representa al justicialismo, y la sindical, que representa al verdadero sindicalismo. Para que este sindicalismo pueda desenvolver su acción paralelamente al gobierno, es necesario que sea libre. Nosotros no tenemos desde el gobierno ninguna imposición hacia el sindicalismo. Tenemos, sí, un acuerdo y cuando yo voy a tomar una medida de gobierno los consulto y cuando ellos van a tomar una medida me consultan. En eso van ellos en ganancia pero yo voy en una ganancia extraordinaria porque me aseguro así un apoyo político que de otra manera no tendría nuestro sistema. Porque estamos los dos defendiendo un mismo objetivo, que es el objetivo de la Nación, y ellos lo saben y en el preámbulo de cada declaración de las organizaciones está colocado que el interés supremo que se defiende es la Nación.[25]

La hegemonía de los intereses de la burguesía nacional en la nueva alianza de clases se expresó a través de la preeminencia del interés nacional por encima de los intereses de clase en pugna. La lucha entre el capital y el trabajo asalariado, inherente al desarrollo capitalista, fue sustituida por la búsqueda de la conciliación de intereses. Ésta fue utilizada para estimular la reproducción del capital nacional. El principal enfrentamiento registrado durante el período fue entre dos bloques de clases y se expresó en torno a dos modelos de desarrollo. Por un lado, las fracciones más poderosas de la burguesía reclamaban el retorno al modelo de industrialización limitada y se oponían totalmente a la política oficial. Reclamaban en realidad una vuelta al "fraude patriótico" y al control de las demandas populares. Por el otro, el gobierno pretendía impulsar un desarrollo acelerado de la industria nacional basado en traslaciones de ingresos del campo a la industria y en restricciones a la influencia del capital extranjero en la vida económica y política

[24] Citado en Gonzalo Cárdenas *et al.*, *El peronismo...*, *op. cit.*

[25] *Ibid.*

del país. En un discurso dado en 1946, el general Perón habría de definir sus suspicacias respecto al capital extranjero:

> No somos de manera alguna enemigos del capital y se verá en el futuro que hemos sido sus verdaderos defensores. Es menester discriminar claramente entre lo que es el capitalismo internacional de los grandes consorcios de explotación foránea y lo que es el capital patrimonial de la industria y el comercio. Nosotros hemos defendido a este último y atacado sin cuartel y sin tregua al primero. El capitalismo internacional es frío e inhumano, el capital patrimonial de la industria y el comercio representa, según nuestro sentir, la herramienta de trabajo de los hombres de empresa. El capital internacional es instrumento de explotación, y el capital patrimonial lo es de bienestar. El primero representa, por lo tanto, la miseria, mientras que el segundo la prosperidad.[26]

La nacionalización de capitales extranjeros y las medidas destinadas a disminuir el poderío económico y la influencia de las fracciones más poderosas de los sectores agropecuario e industrial definieron claramente a los enemigos del proyecto oficial. Y, como era de esperar, provocaron una consistente y sistemática oposición de estos sectores al gobierno. Esta confrontación pudo erosionar la estructura de poder existente cuando la redistribución de ingresos hacia los asalariados hizo sentir sus efectos sobre la propia tasa de ganancia. La caída de la tasa de ganancia del capital industrial marcó los límites estructurales a la permanencia en el poder de un gobierno que pretendía conciliar los intereses del capital con los del trabajo asalariado. En la nueva coyuntura, la acumulación del capital requería una política hacia el sector obrero que sería el reverso de la aplicada por el gobierno peronista. Ello sólo fue posible al precio de un golpe militar y de la estructuración de una nueva coalición de clases en el poder.

[26] Gonzalo Cárdenas *et al.*, *El peronismo...*, *op. cit.*

II. PARADOJAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL ARGENTINO

Los principales conflictos sociales

El golpe militar de 1955 inauguró una nueva coalición de clases en el poder. Las fracciones más poderosas del campo y de la industria recuperaron el control sobre el poder político. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la década del treinta, esta vez no existió una clara hegemonía política de una fracción sobre la otra.

El modelo de desarrollo distribucionista dio un impulso considerable a la acumulación del capital en la coyuntura inmediata de posguerra. En el mediano plazo, afectó negativamente la tasa de ganancia erosionando la base de la estrategia política del peronismo: la conciliación de intereses entre el capital y el trabajo asalariado. La necesidad de reemplazar mano de obra por bienes de capital, a fin de restituir la tasa de ganancia a un nivel adecuado para impulsar la acumulación del capital, creó las condiciones para la desintegración de la alianza de clases que constituyó al peronismo. La oposición al gobierno de las grandes fracciones de la burguesía fue potenciada por el temor y el desconcierto del segmento nacional de la burguesía industrial frente a un modelo de desarrollo que amenazaba su tasa de ganancia.

Cuando en 1955 un golpe militar desplazó al general Perón del gobierno, muy poco de la primitiva coalición de clases que estructuró al peronismo quedaba en pie. A partir de entonces, la burguesía industrial nacional buscó otros aliados y otros canales políticos para expresar sus intereses. El contenido de clase del peronismo en la oposición cambió sustancialmente: de ser la expresión de una alianza de clases, el movimiento pasó a representar los intereses económicos y políticos de la clase obrera.

Las condiciones en que se desarrolló la acumulación del capital gestaron un creciente enfrentamiento entre los intereses de la clase obrera y los del resto de la burguesía. El conflicto fue desarrollándose a lo largo de la década y pasó a dominar la coyuntura política desde fines de los años sesenta. Pero no fue el único: el período analizado también se caracterizó por una lucha sin cuartel dentro de la propia coalición de clases en el poder.